



Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al Anteproyecto de Ley por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril y se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 h) de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y 5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, cúmpleme informarle lo siguiente:

## I

Tal y como indica la memoria de impacto normativo, así como la propia rúbrica del Anteproyecto sometido a informe “mediante el presente anteproyecto de ley se termina de trasponer al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior”.

De este modo, se reestructura el texto del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regulando en un nuevo Título IV del Libro Tercero, que sustituye al actualmente referido a las entidades de gestión de los derechos reconocidos por el propio texto, el régimen de la Gestión colectiva de los derechos reconocidos en la Ley, dentro del que se incluye en los Capítulo V a VII la regulación de dichas entidades de gestión.

Debe, como punto de partida, tenerse en cuenta que el considerando 52 de la Directiva (UE) 2014/26 indica que “Es importante que las entidades de gestión colectiva respeten los derechos a la vida privada y a la protección de los datos de carácter personal de los titulares de derechos, los miembros, los usuarios y demás personas cuyos datos personales traten. La Directiva 95/46/CE rige el tratamiento de datos personales efectuado en los Estados miembros en el contexto de la presente Directiva y bajo la supervisión de las autoridades competentes de los Estados miembros, en particular de las autoridades públicas independientes designadas por los Estados miembros. Los titulares de derechos deben recibir información adecuada sobre el tratamiento de sus datos, los destinatarios de esos datos, los plazos de conservación de los mismos en cualquier base de datos y la forma en que los titulares de derechos pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión de los datos de carácter personal que les conciernen, de



conformidad con la Directiva 95/46/CE. En particular, los identificadores únicos que permiten la identificación indirecta de una persona deben tratarse como datos personales en el sentido de dicha Directiva”

Igualmente los considerandos 42 y 53 hacen referencia a esta materia, indicando el primero de ellos que “Dado que la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo confiere a todos los interesados el derecho a obtener la rectificación, la supresión o el bloqueo de los datos inexactos o incompletos, la presente Directiva también debe garantizar que se corrijan sin dilación indebida los datos inexactos que afecten a los titulares de derechos o a otras entidades de gestión colectiva en el caso de las licencias multiterritoriales”. Por su parte, el considerando 53, dentro del ámbito sancionador, señala que “Las disposiciones sobre las medidas coercitivas deben entenderse sin perjuicio de las competencias de las autoridades públicas independientes nacionales establecidas por los Estados miembros en virtud de la Directiva 95/46/CE para controlar el cumplimiento de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de esa Directiva”

Finalmente, el artículo 42 de la Directiva dispone que “El tratamiento de datos personales que se efectúe en el marco de la presente Directiva se hará conforme a lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE”; es decir, todo tratamiento de datos que se lleve a cabo, tanto por las entidades de gestión como por las Administraciones Públicas competentes se encontrará sometido a las disposiciones generales de protección de datos, debiendo tenerse en cuenta que las mismas serán objeto de modificación como consecuencia de la plena aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

Tomando en consideración lo que se ha venido indicando **podría resultar conveniente que se estableciese expresamente en el Proyecto sometido a informe, en especial en relación con la actividad llevada a cabo por las entidades de gestión, que el tratamiento de datos de carácter personal que llevasen a cabo para el ejercicio de las actividades a las que se refiere el Anteproyecto se encontrará sometido a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal**, en correlación con lo que indica el ya citado considerando 52 de la Directiva 2014/26.

Del mismo modo, en lo que respecta al ámbito sancionador, y a fin de evitar posibles conflictos como consecuencia de la infracción de la normativa de protección de datos de carácter personal, **sería necesario que se introdujese en el Capítulo VII del Título IV del Libro tercero del Anteproyecto una previsión específica que indicase que las responsabilidades derivadas de la comisión de las infracciones que en el**



**mismo se establecen deben entenderse sin perjuicio de las competencias que a la Agencia Española de Protección de Datos atribuyen las normas vigentes en materia de protección de datos de carácter personal, telecomunicaciones y servicios de la sociedad de la información.** De este modo se recogería igualmente la cautela contenida en el considerando 53 de la Directiva 2014/26.

## II

El Anteproyecto sometido a informe establece, por otra parte, una serie de previsiones que implican la realización de determinados tratamientos de datos de carácter personal. En este sentido, el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa”; del mismo modo, el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica legitima la cesión de datos sin contar con el consentimiento del interesado cuando la misma se encuentre amparada por una norma con rango de Ley.

Ciertamente, el hecho de que el propio Anteproyecto estableciese stas previsiones podría dar a entender que los tratamientos y cesiones de datos previstos en el texto se encontrarían amparadas por lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, por cuanto sería ésta la norma que legitimaría el tratamiento. Sin embargo, esta Agencia ha puesto reiteradamente de manifiesto que la mera previsión de un determinado tratamiento o cesión de datos por un proyecto de disposición con rango de Ley no implica por sí sola la licitud de ese tratamiento o cesión desde el punto de vista de la normativa de protección de datos por cuanto constituyendo dicha habilitación legal una limitación del principio de consentimiento deberá respetar el contenido esencial del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, tal y como impone el artículo 53.1 de la Constitución. Así lo ha puesto de relieve el Tribunal Constitucional en la Sentencia 17/2013, de 31 de enero, en cuyo fundamento jurídico 4 se señala lo siguiente:

*“En conclusión, tal como establece nuestra doctrina, es claro que la LOPD no permite la comunicación indiscriminada de datos personales entre Administraciones Públicas dado que, además, estos datos están, en principio, afectos a finalidades concretas y predeterminadas que son las que motivaron su recogida y tratamiento. Por tanto, la cesión de datos entre Administraciones Públicas sin consentimiento del afectado, cuando se cedan para el ejercicio de competencias distintas o que versen sobre materias distintas de aquellas que motivaron su recogida, únicamente será posible, fuera de los supuestos expresamente previstos por la propia LOPD, si existe previsión legal expresa para ello [art. 11.2.a) en relación con el 6.1 LOPD] ya que, a tenor de lo dispuesto en el art. 53.1 CE, los límites al derecho a consentir la cesión de los datos a*



*finés distintos para los que fueron recabados están sometidos a reserva de ley. Reserva legal que, como es obvio, habrá de cumplir con los restantes requisitos derivados de nuestra doctrina- esencialmente, basarse en bienes de dimensión constitucional y respetar las exigencias del principio de proporcionalidad- para poder considerar conforme con la Constitución la circunstancia de que la norma legal en cuestión no contemple, por tanto, la necesidad de contar con el consentimiento del afectado para autorizar la cesión de datos.”*

De este modo deberá verificarse si dicha habilitación resulta coherente con los principios de protección de datos y, particularmente, con los consagrados en el artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999. En este sentido, el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”, añadiendo el artículo 4.2 que “los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos”.

En este mismo sentido, debe tenerse en cuenta que la habilitación legal no aparece expresamente recogida entre los supuestos legitimadores del tratamiento previstos en el artículo 6.1 del Reglamento General de Protección de Datos, si bien las letras c) y e) del citado precepto legitiman el tratamiento de datos cuando “es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento” o “es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento”. Asimismo, el artículo 6.3 añade que en estos supuestos la base legal del tratamiento deberá estar determinada en el Derecho de la Unión o el Derecho de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento.

### III

Entrando ya en las disposiciones concretas contenidas en el Anteproyecto sometido a informe, el artículo 161 del Anteproyecto, dentro de la regulación del órgano de administración de las entidades de gestión compartida, y tras disponer en su apartado 2 que “Las entidades de gestión determinarán y aplicarán procedimientos para evitar conflictos de intereses y, cuando dichos conflictos no puedan evitarse, procedimientos destinados a detectar, gestionar, controlar y declarar conflictos de intereses reales o potenciales”, añade en su apartado 3 que “Antes de asumir sus cargos y, posteriormente, con carácter anual, las personas integrantes de los órganos de gobierno y representación efectuarán una declaración a la asamblea general sobre conflictos de intereses con la siguiente información: a) Cualesquiera



intereses en la entidad de gestión. b) Toda remuneración percibida durante el ejercicio anterior de la entidad de gestión, incluso en forma de planes de pensiones, retribuciones en especie y otros tipos de prestaciones. c) Toda cantidad percibida durante el ejercicio anterior de la entidad de gestión como titular de derechos. d) Cualquier conflicto real o potencial entre los intereses personales y los de la entidad de gestión o entre las obligaciones respecto de la entidad de gestión y cualquier obligación respecto de cualquier otra persona física o jurídica”.

Esta previsión implica el tratamiento por parte de la entidad de gestión de los datos de carácter personal de los miembros del órgano de administración que afloran de la declaración establecida en el mismo, siendo preciso determinar si tal tratamiento será conforme a los principios de protección de datos, en los términos que acaban de analizarse.

En este sentido, es preciso tener en cuenta que el artículo 161 del Anteproyecto viene a reproducir de modo prácticamente literal lo establecido en el artículo 10.2 de la Directiva 2014/26, que establece que:

*“Los Estados miembros velarán por que las entidades de gestión colectiva establezcan y apliquen procedimientos destinados a evitar conflictos de intereses y, cuando dichos conflictos no puedan evitarse, procedimientos destinados a detectar, gestionar, controlar y declarar conflictos de intereses reales o potenciales, con el fin de evitar que los intereses colectivos de los titulares de derechos a los que la entidad representa se vean perjudicados.*

*Los procedimientos mencionados en el párrafo primero incluirán una declaración anual individual de cada una de las personas a las que se hace referencia en el apartado 1 a la asamblea general de los miembros, con la información siguiente:*

- a) cualesquiera intereses en la entidad de gestión colectiva;*
- b) toda remuneración percibida durante el ejercicio anterior de la entidad de gestión colectiva, incluso en forma de planes de pensiones, retribuciones en especie y otros tipos de prestaciones;*
- c) toda cantidad percibida durante el ejercicio anterior de la entidad de gestión colectiva como titular de derechos;*
- d) cualquier conflicto real o potencial entre los intereses personales y los de la entidad de gestión colectiva o entre las obligaciones respecto de la entidad de gestión colectiva y cualquier obligación respecto de cualquier otra persona física o jurídica.”*



De este modo, el legislador de la Unión Europea ha venido a ponderar la adecuación del tratamiento a la finalidad de control de la transparencia de las entidades de gestión, considerando adecuados, pertinentes y no excesivos los datos que se enumeran en el artículo 10.2 y que reproduce literalmente el artículo 161 del Anteproyecto.

Ello además se complementa con la cautela establecida en el último párrafo del artículo 161.3, en que se indica, siguiendo la regla establecida en el artículo 42 de la Directiva, a la que se hizo referencia en un lugar anterior, que “La entidad de gestión y sus miembros deberán respetar el carácter confidencial de la información a la que accedan mediante estas declaraciones cuyo tratamiento, en todo caso, estará sujeto al cumplimiento de la normativa de defensa de la competencia y de protección de datos”.

#### IV

Debe hacerse ahora referencia a las disposiciones del Anteproyecto referidas a las obligaciones de transparencia de las entidades de gestión a las que el Anteproyecto dedica el capítulo V I del Título IV del Libro Tercero.

Dentro de estas obligaciones de transparencia merece especial mención lo dispuesto en el artículo 183, referente a la información que podrá ser facilitada, previa solicitud, no sólo a los titulares de derechos u otras entidades de gestión, sino a cualquier usuario. Dentro del apartado 1 de dicho precepto se establece la posible comunicación de la información referida a “las personas que forman parte de la alta dirección y de los órganos de gobierno y representación de la entidad, así como de las comisiones y grupos de trabajo en las que aquellas participen” (letra c) y “las retribuciones y demás percepciones que se atribuyan a las personas indicadas en la letra anterior por su condición de miembros de los órganos de gobierno y representación e integrantes de las comisiones y grupos de trabajo” (letra d), añadiendo que “Estas informaciones se podrán dar de forma global por concepto retributivo, recogiendo separadamente los correspondientes al personal de alta dirección del resto de miembros o integrantes de los órganos y comisiones anteriormente señalados que no tengan dicha condición”.

Igualmente, entre las informaciones que deberán hacerse públicas, el artículo 185 se refiere en su letra c) a “Los integrantes de los órganos de gobierno y representación de la entidad”.

Asimismo, el artículo 186 establece la obligación de las entidades de gestión de notificar a la Administración estatal o autonómica que resulte competente “Los documentos que contengan la información completa sobre los nombramientos y ceses de sus administradores, apoderados y de las personas que integran el órgano que asuma la función de control interno de la entidad”



(letra a) y “Las declaraciones anuales sobre conflictos de interés a la asamblea general de las personas integrantes de los órganos de gobierno y representación y de las que ejerzan la función de control interno de la entidad” (letra b).

Finalmente, el Anteproyecto modifica la disposición adicional segunda del Texto Refundido, reguladora del informe anual de transparencia, que deberá incorporar la descripción de la estructura jurídica y administrativa de la entidad, así como la información sobre el importe total de las remuneraciones pagadas en el ejercicio anterior a los administradores y directivos de la entidad.

En relación con esta cuestión, debe en primer lugar señalarse que el considerando 55 de la Directiva 2014/26 incluye dentro de los objetivos del citado texto “garantizar un nivel de transparencia suficiente de las entidades de gestión colectiva”. En este sentido, el considerando 34 señala que “A fin de reforzar la confianza de los titulares de derechos, de los usuarios y de otras entidades de gestión colectiva en la gestión de derechos por estas entidades, cada entidad de gestión colectiva debe cumplir requisitos específicos de transparencia”.

De este modo, se dedica el capítulo 5 de la Directiva a la regulación de las obligaciones de transparencia e información, respecto de las que además debe tenerse en cuenta que el considerando 9 aclara que “La presente Directiva tiene por objeto establecer requisitos aplicables a las entidades de gestión colectiva para garantizar un elevado nivel de administración, gestión financiera, transparencia e información. No obstante, ello no debe impedir que los Estados miembros mantengan o impongan normas más estrictas que las establecidas en el título II de la presente Directiva a las entidades de gestión colectiva establecidas en sus territorios, siempre que dichas normas más estrictas sean compatibles con el Derecho de la Unión”.

Como ya se ha indicado, deberá analizarse si las habilitaciones para las comunicaciones de datos contenidas en los preceptos que se han transcrito resultan adecuadas con los principios contenidos en la legislación de protección de datos y particularmente con el de proporcionalidad o minimización en el tratamiento, teniendo en cuenta que la Directiva 2014/26 establece una serie de obligaciones de transparencia, configurándose además como una norma de mínimos, de modo que los Estados miembros podrían establecer, siguiendo criterios de proporcionalidad, normas más estrictas en esta materia.

Dicho esto, el artículo 21.1 d) de la Directiva se establece la posibilidad de hacer pública la información referente a las personas contempladas en el artículo 10 de la misma; es decir, quienes dirijan las actividades de la entidad de gestión.



Al propio tiempo, el artículo 22 de la Directiva impone a las entidades de gestión la publicación del informe anual de transparencia, en el que se incluirá la información contenida en el anexo de dicha norma, en el que se incluye la mención de la descripción de la estructura jurídica y administrativa de la entidad así como el importe total de las remuneraciones pagadas en el ejercicio anterior a las personas contempladas no sólo en el citado artículo 10, sino también en el artículo 9, es decir, las que formen parte del órgano que ejerza la función de supervisión de la entidad, incluyendo asimismo los beneficios de otra índole que les hubieran sido concedidos.

De este modo, las previsiones contenidas en el Anteproyecto que responden a lo dispuesto en los mencionados artículos 21 y 22 de la Directiva traerían directa causa de la misma, habiendo sido el legislador de la Unión Europea quien habría ponderado la proporcionalidad de las comunicaciones que de dichos preceptos se desprenden.

No obstante, como puede deducirse de lo que ya se ha reproducido, las obligaciones de transparencia previstas en el Anteproyecto exceden de las contenidas en la Directiva; es decir, el legislador española estaría haciendo uso en el Anteproyecto de la posibilidad a la que se refiere el considerando 9 de la Directiva de imponer unas mayores obligaciones de transparencia que las previstas en la norma comunitaria. De este modo, debería plantearse si el requisito de proporcionalidad seguiría siendo aplicable a estas medidas adicionales de transparencia.

Debe a tal efecto recordarse que el Texto Refundido actualmente vigente ya impone determinadas obligaciones en este sentido. Así, el artículo 157.1 g) les impone la obligación de informar a sus miembros, previa solicitud por escrito, entre otras cuestiones, de “Las personas que forman parte de la alta dirección y de los órganos de representación, así como de las comisiones y grupos de trabajo en las que aquéllas participen” y “Las retribuciones y demás percepciones que se atribuyan a las personas indicadas en el párrafo anterior por su condición de miembros de los órganos de representación y de alta dirección e integrantes de las comisiones y grupos de trabajo. Estas informaciones se podrán dar de forma global por concepto retributivo, recogiendo separadamente los correspondientes al personal de alta dirección del resto de miembros o integrantes de los órganos y comisiones anteriormente señalados que no tengan dicha condición”.

Quiere ello decir que la novedad del Anteproyecto sometido a informe consiste en habilitar la comunicación de estos datos, siempre previo requerimiento del solicitante, no sólo a los titulares de derechos y entidades de gestión, sino también a “todo usuario”, lo que impondría valorar si esta ampliación de los posibles destinatarios de la información puede considerarse ajustada a la finalidad perseguida por la norma.





Para ello debe tenerse en cuenta que el propio texto no prevé una transmisión desglosada de la información, sino la posibilidad de que la misma sea facilitada “de forma global por concepto retributivo, recogiendo separadamente los correspondientes al personal de alta dirección del resto de miembros o integrantes de los órganos y comisiones anteriormente señalados que no tengan dicha condición”. Al propio tiempo, como se ha dicho, el considerando 55 de la Directiva 2017/26 recalca que la transparencia de las entidades de gestión deviene como uno de los fines esenciales de la norma, pudiendo así los Estados miembros establecer normas adicionales que coadyuven a ese fin.

Teniendo en cuenta estas circunstancias, cabe considerar que la publicidad en los términos descritos sería ajustada al principio de proporcionalidad. Ahora bien, **para garantizar adecuadamente la ponderación de la finalidad de transparencia con la garantía del derecho fundamental de quienes desempeñen los puestos de administración y dirección sería conveniente reemplazar en el artículo 183.1 d) la expresión “se podrán dar” por “se darán”**.

## V

Debe hacerse referencia en este lugar a las competencias de supervisión de las Administraciones Públicas y al régimen sancionador establecido en el Anteproyecto sometido a informe.

En relación con este punto, debe recordarse nuevamente lo indicado en el apartado I de este informe, de modo que las responsabilidades en que pudieran incurrir las entidades de gestión deberán entenderse sin perjuicio de las que pudieran derivarse de la aplicación de la normativa de protección de datos de carácter personal, por lo que debería hacerse constar esta circunstancia expresamente en el texto sometido a informe.

Junto a dicha consideración cabe hacer referencia a tres previsiones adicionales: la referente a las facultades de obtención de información de las administraciones públicas que en cada caso resulten competentes, la atinente al intercambio de información incluida en la nueva disposición adicional tercera del Texto Refundido que introduce el Anteproyecto y la relativa a la publicación, potestativa u obligatoria, de las resoluciones sancionadoras que en su caso se impusieran.

En cuanto a la primera de las cuestiones citadas, el párrafo segundo del artículo 154.1 dispone que “las Administraciones competentes podrán realizar las actividades de inspección y control que consideren convenientes, recabando, cuando resulte necesario, la colaboración de otras entidades públicas o privadas”, previsión que se complementa con el artículo 154.2, a



cuyo tenor “Las entidades de gestión, las entidades dependientes de las mismas y los operadores de gestión independientes estarán obligados a colaborar con las Administraciones competentes y atender diligentemente a sus requerimientos de información y documentación”. El artículo 155 clarifica cuándo estas competencias corresponderán a las Comunidades Autónomas y cuándo serán competencia del Ministerio de educación, Cultura y Deporte.

El acceso a la información a la que se refiere el artículo 154 del Anteproyecto implicará, en su caso, una cesión de datos de carácter personal que deberá resultar conforme con los principios de protección de datos, de conformidad con lo que se ha señalado en el apartado II del presente informe.

En este sentido, el artículo 36.1 de la Directiva 2014/26 dispone que “Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes para ello hagan un seguimiento del cumplimiento por parte de las entidades de gestión colectiva establecidas en su territorio de las disposiciones de Derecho nacional adoptadas de conformidad con los requisitos establecidos en la presente Directiva”, debiendo habilitarse a los miembros de una entidad de gestión colectiva, a los titulares de derechos, a los usuarios, a las entidades de gestión colectiva y a las demás partes interesadas para, según el artículo 36.2 “notificar a las autoridades competentes designadas para tal fin las actividades o circunstancias que, en su opinión, constituyan un incumplimiento de las disposiciones de Derecho nacional adoptadas de conformidad con los requisitos establecidos por la presente Directiva”. Además, añade el artículo 36.3 “Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes designadas para tal fin tengan competencia para imponer sanciones apropiadas o adoptar medidas adecuadas en caso de incumplimiento de las disposiciones de Derecho interno adoptadas en aplicación de la presente Directiva. Estas sanciones y medidas deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias”.

El seguimiento y supervisión continua a la que se refiere el artículo 36.1 exige que las autoridades de supervisión puedan acceder a la información que resulte relevante para poder llevar a cabo tal misión, dado que en caso contrario quedarían menoscabadas las competencias de cumplimiento establecidas en la Directiva. De este modo, cabe considerar que el tratamiento de estos datos resultará ajustado a la legislación de protección de datos. En este sentido, debe recordarse que el artículo 6.1 e) del reglamento general de Protección de Datos considera lícito el tratamiento “necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento”.

No obstante, **sería conveniente que el artículo 154 del Anteproyecto completase la habilitación conferida con una previsión que garantizase la confidencialidad de las Administraciones competentes en relación con la**



**información a la que hubiesen accedió en el ejercicio de sus competencias.**

En lo que respecta al intercambio de información, la disposición adicional tercera del Texto Refundido, en la redacción prevista en el Anteproyecto establece en su apartado 1 que “La Administración competente conforme al artículo 155 responderá, sin dilaciones indebidas, a las solicitudes de información debidamente razonadas que le efectúe una autoridad competente de otro Estado miembro en relación con la aplicación de la presente ley, en particular con las actividades de las entidades de gestión que tengan establecimiento en España”.

Añade el apartado 2 que “La Administración competente conforme al artículo 155 dará respuesta motivada en el plazo de tres meses a las solicitudes efectuadas por autoridades competentes de otros Estados miembro de la Unión Europea para adoptar, en el marco de sus competencias, medidas adecuadas contra una entidad de gestión que tenga establecimiento en España por las infracciones de la presente ley que hubiera cometido en el desarrollo de sus actividades en el Estado miembro solicitante”.

En este sentido, debe tenerse en cuenta la habilitación establecida en el artículo 6.1 e) del Reglamento General de Protección de Datos, al que acaba de hacerse referencia, teniendo en cuenta que el artículo 37 de la Directiva 2014/29 habilita la transmisión de datos a la que se está haciendo referencia, por cuanto establece que:

*“1. A fin de facilitar el seguimiento de la aplicación de la presente Directiva, cada Estado miembro velará por que cualquier solicitud de información recibida de una autoridad competente de otro Estado miembro, designada para tal fin, relativa a asuntos relacionados con la aplicación de la presente Directiva, en particular con respecto a las actividades de las entidades de gestión colectiva establecidas en el territorio del Estado miembro solicitado, obtenga respuesta sin dilación indebida por la autoridad competente designada para tal fin, siempre que la solicitud esté debidamente razonada.*

*2. Cuando una autoridad competente considere que una entidad de gestión colectiva establecida en otro Estado miembro pero que opera en su territorio pueda no estar cumpliendo las disposiciones de Derecho nacional del Estado miembro en el que esa entidad de gestión colectiva está establecida y que hayan sido adoptadas de conformidad con los requisitos establecidos en la presente Directiva, podrá transmitir a la atención de la autoridad competente del Estado miembro en el que la organización de gestión colectiva esté establecida toda la información pertinente, acompañada en su caso de una solicitud de que esa autoridad adopte las medidas adecuadas en el marco de sus*



*competencias. La autoridad competente solicitada dará una respuesta motivada en un plazo de tres meses.*

*3. La autoridad competente que formule esa solicitud podrá también remitir los asuntos a que se refiere el apartado 2 al grupo de expertos establecido de conformidad con el artículo 41.”*

## VI

Por otra parte, como ya se adelantó, dentro del régimen sancionador de las entidades de gestión, el artículo 192.2 del Anteproyecto establece que “Las resoluciones sancionadoras por infracciones muy graves deberán ser publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» y, en su caso, en el de la Comunidad Autónoma correspondiente, una vez que sean firmes en vía administrativa, y previa disociación de los datos personales que contenga”. Al propio tiempo, el artículo 192.4 dispone que “Las resoluciones sancionadoras por infracciones graves podrán ser publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» y, en su caso, en el de la Comunidad Autónoma correspondiente, una vez que sean firmes en vía administrativa, y previa disociación de los datos personales que contengan”.

Dichos preceptos reproducen literalmente lo establecido en el actual artículo 162 quáter del Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, introducido por la reforma operada por la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Debe en este punto recordarse que el citado texto legal fue objeto de informe de esta Agencia Española de Protección de Datos, de fecha 24 de julio de 2013, que precisamente planteaba la necesidad de incluir una cautela relacionada con la disociación de los datos contenidos en la resolución. Así, en el informe se indicaba lo siguiente:

*“Debe por último hacerse referencia a la publicidad de las resoluciones sancionadoras correspondientes a la comisión por las entidades de gestión de infracciones muy graves, respecto de las cuales el artículo 159 quater.2 de la Ley de propiedad Intelectual, objeto de introducción por el apartado veintisiete del artículo 1 de la reforma, dispone que “Las sanciones por infracciones muy graves deberán ser publicadas en el Boletín Oficial del Estado y, en su caso, en el de la Comunidad Autónoma correspondiente, una vez que sean firmes en vía administrativa”.*



*Debe tenerse en cuenta que el artículo 159 bis.1 de la Ley, conforme al apartado veinticinco del artículo primero, hace recaer el régimen sancionador en las propias entidades de gestión y no en las personas que integren sus órganos de gobierno o representación; es decir, el régimen sancionador siempre recaerá sobre personas jurídicas constituidas conforme al régimen establecido en la Ley, excluidas de la aplicación de las normas de protección de datos.*

*Sin embargo, las resoluciones en que se adopten las sanciones por la comisión de infracciones muy graves podrían contener datos de carácter personal de otros intervinientes en el procedimiento, por lo que su publicidad podría implicar una cesión indiscriminada de sus datos de carácter personal.*

*Ciertamente, el precepto ahora analizado se refiere a las “sanciones” y no a las “resoluciones” en que las mismas se adopten. Sin embargo, se ha considerado necesario introducir esta clarificación a fin de evitar una posible difusión de datos distintos a los propios de la entidad de gestión sobre la que recae el procedimiento sancionador.*

*Por este motivo, sería conveniente que el precepto indicase específicamente que será objeto de publicidad únicamente la información referida a la entidad sancionada, la infracción cometida y la sanción impuesta o que en caso de que se considerase oportuna la publicación de la resolución, se establezca expresamente que la publicación alcanza la misma y que se realizará previa disociación de los datos de carácter personal que la misma pudiera contener.”*

Por ello, procede informar favorablemente el precepto ahora analizado

## VII

Por otra parte, el Anteproyecto establece el régimen de funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual dentro del Título V del Libro Tercero, que en su mayor parte reproduce las disposiciones actualmente vigentes, introducidas por la reforma operada por la ya mencionada Ley 21/2014, aunque alterando la numeración de sus preceptos.

Como ya se indicaba al informar la mencionada reforma del Texto Refundido, en el ya citado informe de 24 de julio de 2013 la reforma introduce, en el punto al que se está haciendo referencia, y en particular en lo que atañe a la Sección Segunda de dicha Comisión, previsiones de carácter esencialmente procedimental, relacionadas con el modo en que las medidas de salvaguarda podrán ser adoptadas, introduciendo, como se indicaba entonces “medidas específicas en exigencia de colaboración para la efectividad de las decisiones



adoptadas en caso de que, desatendida la solicitud de la Comisión, se adopte, en los términos establecidos en el artículo 122 bis de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la autorización judicial para que se interrumpa la prestación de servicios de la sociedad de la información o para que se retiren contenidos que vulneren la propiedad intelectual”.

La única disposición directamente relacionada con la aplicación de las normas de protección de datos es el artículo 195.9 del Anteproyecto, según el cual “el tratamiento llevado a cabo por la Sección Segunda de los datos relacionados con los detalles e informaciones derivados de las actuaciones realizadas en el ámbito de sus funciones, se efectuará de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y, en particular, en su artículo 7.5 si estuvieran referidos a la comisión de infracciones penales o administrativas”.

El contenido de dicha previsión no es sino resultado de la propuesta contenida en el tan citado informe de 24 de julio de 2013, en que se señalaba lo siguiente:

*“En relación con estas previsiones simplemente resulta preciso traer a colación lo ya indicado por esta Agencia en su informe de 8 de junio de 2011 en relación con el tratamiento de los datos llevado a cabo por la Sección Segunda de la Comisión y plasmado en la previsión contenida actualmente en el artículo 13.5 del Real decreto 2889/2011, de 30 de diciembre, que dispone que “El tratamiento llevado a cabo por la Sección Segunda de los datos relacionados con los detalles e informaciones derivados de las actuaciones realizadas en el ámbito de sus funciones, se efectuará de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y, en particular, en su artículo 7.5 si estuvieran referidos a la comisión de infracciones penales o administrativas”, por lo que se considera conveniente que esta disposición fuera incorporada, como un nuevo apartado 9, al artículo 158 ter del Anteproyecto, por cuanto contiene una salvaguarda en defensa del derecho fundamental consagrado por el artículo 18.4 de la Constitución y las normas de protección de datos de carácter personal.”*

Por ello, procede informar favorablemente el precepto ahora analizado